



Comisión de Probidad
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

HONORABLE PLENO

Con fecha 14 de abril del año en curso, fue recibida en esta Comisión la Iniciativa de Ley número 3229 (Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos) presentada por la Diputada Gladis Anabella De León Ruiz.

CONSIDERACIONES GENERALES:

El principio que todas las actuaciones de la administración deben ser públicos tiene su fundamento en que habiendo publicidad, habrá controles por parte del público y de esa manera habrá menos abuso en el ejercicio del poder lo que deviene, entre otras cosas, en menos actos de corrupción y transacciones anómalas en la administración de la cosa pública.

La Constitución Política de la República de Guatemala así lo estipula en su artículo 30, tal como lo hace notar la exposición de motivos de la iniciativa analizada; el mismo establece que todos los actos de la administración son públicos y que los interesados tienen derecho a obtener informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten o la exhibición de los expedientes que deseen consultar, estableciendo el mismo artículo tres excepciones: 1) asuntos militares de seguridad nacional; 2) asuntos diplomáticos igualmente de seguridad nacional y 3) datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Los dos primeros supuestos no son materia en el presente análisis, mas el tercero es precisamente el que atañe, pues las declaraciones patrimoniales o de probidad reguladas en el Capítulo V del Decreto 89-2002 deben ser analizadas a la luz de la disposición constitucional arriba mencionada y del artículo 24 constitucional.

El artículo 24 constitucional contiene en su segundo párrafo dos supuestos que es oportuno analizar: 1) que los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados solamente por la autoridad competente de conformidad con la ley y 2) Es punible revelar el monto de impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas.

Del primero supuesto se desprende que las contabilidades pueden ser revisadas por las entidades que legalmente tiene acceso a ellas por razón de su función, entre ellas están claramente la Superintendencia de la Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, otras entidades estatales de fiscalización y por supuesto las personas que por orden judicial estén facultadas para hacerlo. Es de hacer notar que es clara la norma constitucional al estipular que solamente podrán ser revisadas dichas informaciones y/o contabilidades por autoridad competente de acuerdo a la ley y no por cualquier persona, no solo dentro de la administración pública, sino mucho menos por un particular. De tal suerte, la Constitución permite la revisión contable, financiera o patrimonial solamente a las



Comisión de Probidad
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

entidades estatales que por razón de su función deban tener dicho acceso, mas limita el mismo acceso a todas las demás entidades estatales e, indefectiblemente a los particulares.

El segundo supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 24 antes citado se refiere a la consecuencia de la revelación de la información obtenida por las instituciones y/o personas que por menester de la ley tienen acceso a ellas. Esta norma constitucional deja claramente establecido que es punible la revelación de cualquier información referente a las contabilidades revisadas por las autoridades legalmente facultadas. Es decir, no es permitido el acceso del público en general a las informaciones relativas al patrimonio de las personas y hacer pública dicha información es prohibido.

El artículo 30 constitucional también hace referencia a que las actuaciones administrativas que contienen datos suministrados por particulares en garantía de confidencia no son públicas, en contraposición a todas las demás actuaciones administrativas, salvo lo relativo a seguridad nacional.

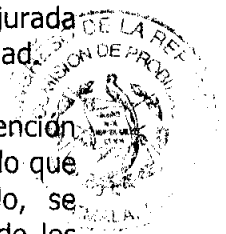
Dentro de la misma normativa constitucional, el artículo 4 estipula que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad **y derechos**. Así, el hecho de pertenecer a la administración pública no desviste al particular de sus derechos constitucionalmente garantizados, en el caso que nos ocupa a la confidencialidad de la información que suministra a la administración referente a su patrimonio.

Pero en el presente caso no se hace referencia a la información fiscal que por ley, todo ciudadano con ingresos e inscrito como contribuyente debe proporcional al fisco, sino a la información proporcionada de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Probidad, específicamente a la declaración patrimonial a la que están obligados los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo. Y este es el caso que debemos analizar a la luz de la normativa constitucional.

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

Someramente, la iniciativa de ley propuesta pretende derogar la norma contenida en el artículo 21 de la Ley de Probidad vigente que estipula que los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad.

En la parte considerativa de la iniciativa de marras se hace especial mención al artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, aludiendo que los actos de la administración son públicos. En el mismo considerando, se mencionan los casos de excepción que menciona el propio artículo, dentro de los cuales están los datos suministrados por particulares bajo la garantía de confidencialidad. Resulta entonces de vital importancia determinar si la declaración





Comisión de Probidad
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

patrimonial a la que se refiere el Capítulo V de la Ley de Probidad deben considerarse datos suministrados bajo la garantía de confidencialidad no solamente la indicada en el artículo 21 de la Ley de Probidad, sino la referida en el artículo 30 constitucional.

En la declaración patrimonial que deben presentar los funcionarios públicos para el ejercicio del cargo se deben incluir los elementos determinados en las literales c), d), e) y f) del artículo 23 de la Ley de Probidad y como puede verse, éstos (los elementos incluidos) contiene toda la información referente a utilidades, pérdidas, costos y otros datos referentes a la contabilidad del funcionario afecto a la declaración patrimonial. Estos elementos claramente se encuentran bajo la protección del artículo 24 constitucional, mismo que declara inviolable dicha información. No debe perderse de vista que el funcionario que se encuentra afecto a la presentación de declaración patrimonial en un momento determinado, antes de asumir el cargo ha sido un particular y lo será cuando deje el cargo; esto es determinante pues de revelarse los datos suministrados se estaría violando el derecho constitucionalmente garantizado del particular a que dichos datos sean resguardados bajo confidencialidad, tal como protege el artículo 24 y lo manda el artículo 30 constitucionales.

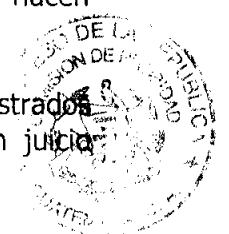
CONCLUSIONES:

La situación jurídica temporal del particular que en determinado momento ocupa un cargo en la administración pública y la obligación de presentar declaración patrimonial no son superiores a la norma constitucional que garantiza que los datos suministrados por particulares deben guardarse bajo garantía de confidencialidad, por lo que la derogatoria propuesta de la norma contenida en el artículo 21 de la Ley de Probidad sería a su vez una normativa de carácter ordinario que no podría modificar ni menoscabar los derechos constitucionalmente garantizados.

Finalmente, se ha determinado que si la finalidad de la iniciativa propuesta es que mediante la obtención de dichos datos por el público en general sea factible que detectarse una anomalía en las referidas declaraciones patrimoniales cualquier persona pueda presentar una denuncia en contra del funcionario o ex funcionario que se crea haya faltado a la probidad en el ejercicio de su cargo y, dichos datos deben hacer prueba dentro de un proceso judicial, la misma sería inconstitucional, ya que el último párrafo del artículo 24 constitucional estipula que los documentos o informaciones obtenidas con violación de dicho artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio.

De tal suerte que de hacerse posible la obtención de los datos suministrados dentro de la declaración patrimonial, la información no sería admisible en juicio desprovéyéndola de toda razón jurídica.

Por los elementos arriba indicados, como resultado del análisis precedente, esta Comisión determina que la iniciativa analizada no debe ser aprobada.





-000010-

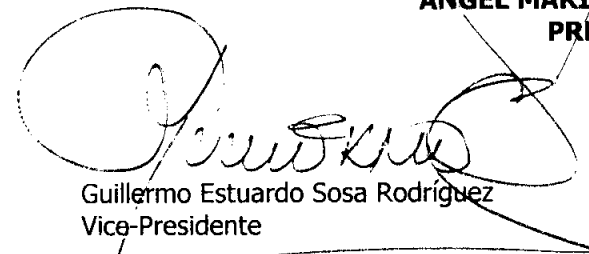
Comisión de Probidad
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN

Con base en lo anterior y lo que para el efecto establecen los artículos 171 literal c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 39, 40, 41, 111 y 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Comisión de Probidad emite **DICTAMEN DESFAVORABLE** a la iniciativa presentada por la representante Gladys Anabella De León Ruiz identificada con el número 3229 y lo somete a consideración del Honorable Pleno.

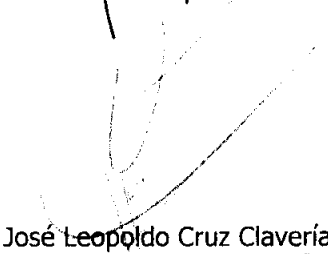
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE PROBIDAD EL VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL CINCO.


ANGEL MARIO SALAZAR MIRÓN
PRESIDENTE


Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez
Vice-Presidente


Moisés David Chuva de León

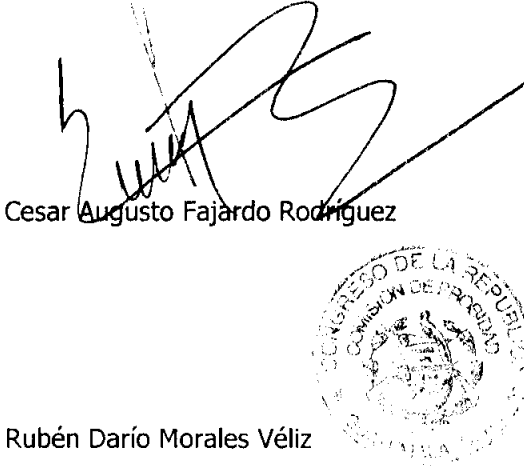

Juan Daniel Cifuentes Velásquez


José Leopoldo Cruz Clavería


Gladys Anabella de León Ruiz


Cesar Augusto Fajardo Rodríguez


Julio René Morales Arévalo



Rubén Darío Morales Véliz



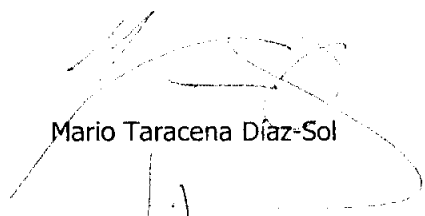


-000011-

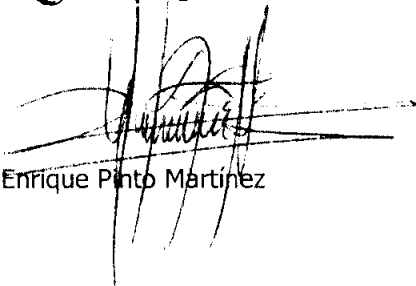
Comisión de Probidad
Congreso de la República de Guatemala, C. A.



Jorge Luis Ortega Torres



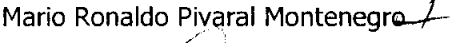
Mario Taracena Díaz-Sol



Enrique Pinto Martínez



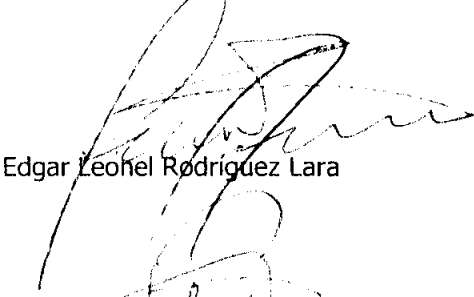
Obdulio Oqueli de León



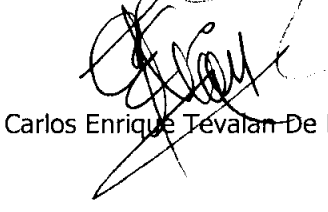
Mario Ronaldo Pivaral Montenegro



Mario Israel Rivera Cabrera



Edgar Leonel Rodríguez Lara



Carlos Enrique Tevalán De León



Obdulio Solórzano Montepoque



Jorge Roberto Alfaro Alvarado



Lester Abigail Reyna Girón

